

ECONOMIA

Dos problemas pendientes: —REMUNERACIONES —ENDEUDAMIENTO

El escenario económico se ha caracterizado durante el presente año por presentar un bajo nivel de actividad, con alto desempleo, y altas tasas de interés, junto a variados intentos, particularmente de tipo monetario y cambiario, por atacar dichos problemas. Hoy es un hecho indiscutible que la economía chilena atraviesa por un período de serias dificultades.

Abandonada la política de ajuste automático en el mes de junio al efectuarse la primera devaluación, las autoridades económicas han tratado de corregir la distorsión de precios que existía entre bienes transables y no transables internacionalmente, de evitar un posible problema de balanza de pagos que se generaba a partir de entonces, principalmente por las expectativas de futuras devaluaciones (desconfianza en el peso), de restituir el nivel real de dinero que existía a fines de 1981, de disminuir el nivel de remuneraciones, de mantener una tasa de interés real lo suficientemente baja para no provocar mayores problemas a los sectores endeudados, pero no tan baja que fomentara la sustitución de deudas en dólares por deudas en pesos, de impedir un rebrote inflacionario que se hiciera incontrolable y, en fin, aparentemente, de cumplir con una serie de restricciones puestas por el FMI, no muy divulgadas ni conocidas por la opinión pública. Todo lo anterior se ha intentado fundamentalmente haciendo uso de políticas monetarias y cambiarias, en algún momento muy cambiantes. ▶

Lo que últimamente se ha pretendido ha sido crear un clima de estabilidad económica que hiciera posible una reactivación que provendría principalmente del impulso que transmitiría el sector exportador. A esto habría que agregar algunas insinuaciones de aumento en el gasto fiscal que ayudaría a dar el empuje inicial necesario.

Hasta el momento los resultados son extraordinariamente ambiguos, lo que permite a algunos sostener que se va por buen camino (superavit comercial, caída en remuneraciones, tasas reales de interés más bajas, inflación no desbocada) y a otros sostener exactamente lo contrario (caída continua en la cantidad de dinero, tasas nominales de interés muy altas —que serían las relevantes—, caídas continuas en producción y ventas). Quizás lo único meridianamente claro sea que a los sectores productivos no ha logrado movérselos con argumentaciones de tipo macroeconómico. El problema que ellos enfrentan en su quehacer diario es demasiado angustiioso y apremiante como para que su pesimismo y desconfianza pueda cambiar porque la balanza de pagos muestra un superávit o porque el desempleo tenga una caída mensual marginal. Así, las autoridades y los analistas económicos concuerdan en que uno de los principales problemas que existen es el de la desconfianza. Si es correcto que ella se origina en la situación actual de los agentes económicos, sólo atendiendo este aspecto podrá lograrse crear un ambiente que haga posible restablecer la confianza e iniciar la reactivación.

Los agentes productivos temen hoy en día nada menos que perder todos sus bienes, que son en muchos casos no sólo el fruto de muchos años de trabajo, sino además su fuente de sustentación, y en no pocas ocasiones, particularmente en la agricultura, la base de su forma de vida individual y familiar. Por esto es que creemos que mientras no se solucione este problema no habrá ninguna política económica, ni ningún grupo de técnicos

capaces de hacer volver la confianza en el futuro, factor indispensable para la reactivación.

A nuestro juicio hay dos problemas de fondo, que definen de manera decisiva los términos del "juego económico", que hoy no son claros. En primer lugar, no está claro cómo se distribuirá el producto, qué parte corresponderá a cada quien. En otras palabras, quizás demasiado generales pero de lenguaje llano, qué parte corresponderá al capital y qué parte al trabajo. En segundo lugar, hay una gran incertidumbre sobre a quién pertenece la riqueza; nuevamente en palabras sencillas, no se sabe si algunos bienes son de sus dueños, actuales deudores, o si bien ellos pertenecerán en definitiva a los acreedores.

Desde hace algún tiempo se habla de la necesidad de bajar el nivel de remuneraciones, y han sido precisamente las autoridades económicas quienes lo han hecho presente con mayor fuerza. Es muy posible que durante el período de expansión de la economía los sueldos y salarios hayan tenido un aumento más allá de lo que la economía era capaz de dar en el mediano y largo plazo. Esto hizo posible un nivel de vida superior al que era factible mantener y que superó en muchos casos las más optimistas expectativas. El sector asalariado medio habría gastado, en consecuencia, durante los últimos años por encima de lo que puede considerarse su ingreso permanente de largo plazo. Hoy debe volverse a una realidad que no sólo le obligará a reducir sus gastos actuales, sino virtualmente a devolver buena parte del exceso recibido y gastado.

Todo esto significa que las remuneraciones deben bajar en términos reales o de poder adquisitivo. La autoridad debe, en consecuencia, hacer explícita la forma en que esto ocurrirá y ojalá la dimensión esperada de la reducción. Si la forma hubiera sido una rebaja nominal, ella habría sido perfectamente clara y habría sido vista y entendida en forma ▶

más rápida y simple. Se optó —quizás con excelentes argumentos— por un camino distinto, éste es, la devaluación y posterior inflación que debería tener como efecto una reducción en los salarios reales (poder adquisitivo). Sin embargo, la medida de la devaluación se anunció como la alternativa para evitar una reducción de remuneraciones que habría afectado a los trabajadores. Esta ha sido una señal equívoca. La devaluación pretendía, entre otras cosas, disminuir el nivel de remuneraciones reales, y no aceptarlo y comunicarlo en forma clara y directa sólo puede traer dificultades en su inteligencia por parte de los trabajadores.

El Gobierno debiera adelantar la forma como operará en esta materia. Por ejemplo, habría sido claro si se hubiera dicho que por un período de seis meses o un año después de la devaluación los sueldos y salarios sólo se incrementarían en los aumentos del IPC que no provinieran del efecto que ella tendría sobre los productos importados. Nos parece que los trabajadores tienen suficiente madurez para comprender un hecho tan obvio como que si se devalúa y a continuación los precios internos y las remuneraciones suben en la misma proporción, el efecto es nulo.

Es cierto que el Gobierno no fija los sueldos y salarios del sector privado, pero no es menos cierto que la inmensa mayoría que no negocia colectivamente se rige fuertemente por las señales que provienen del sector público. Incluso las negociaciones colectivas se beneficiarían de una pauta al respecto.

Es sin duda, difícil para empresarios y trabajadores ponerse de acuerdo en una situación complicada como la actual y con gran incertidumbre sobre el futuro. El intento de ambas partes por "tomar un seguro" hacia el futuro en las negociaciones impondrá un costo social real que en buena medida podría evitarse si el Gobierno diera una señal inequívoca de su política al respecto. Cautelar la paz social

por esta vía, al mismo tiempo que minimizar el costo económico del ajuste real de remuneraciones bien merece un gran esfuerzo gubernamental.

El segundo problema de fondo que requiere ser enfrentado es el de los deudores. Creemos que no es suficiente, a estas alturas, insistir en problemas superficiales ni en buscar culpables. Como decíamos antes, se trata de recuperar la confianza de los sectores productivos, a la brevedad posible, y con el menor costo económico.

Lo anterior requiere enfrentar el problema en forma global y profunda, de modo de no dejar lugar a equívocos ni a expectativas de nuevas acciones sobre la misma materia.

El enfoque global implica reconocer que hay cuatro sectores en juego: los deudores, los intermediarios financieros, los acreedores finales y los asalariados. El debate se ha concentrado en los dos primeros. Sin embargo, creemos que ello conduce a soluciones erróneas y parciales. No se puede desconocer el papel decisivo que han jugado los que hemos llamado acreedores finales. En efecto, es impensable el actual nivel de deudas si no se hubiera contado con los fondos provistos por los acreedores extranjeros, principalmente bancos, que prestaron cantidades sustanciales de dinero a la banca nacional entre los años 1979 y 1981. Asimismo los depositantes nacionales que prestaron por largos períodos a altísimas tasas de interés —con el alto riesgo que ello debe traer aparejado— constituyen hoy uno de los grupos que objetivamente están involucrados en el problema. Finalmente, los asalariados que han sido mencionados frecuentemente como uno de los candidatos a "pagar la cuenta", sin otra racionalidad aparente que una supuesta facilidad práctica para cobrarles. Siendo esto políticamente y éticamente más que discutible quedarían, sin embargo, en pie las consideraciones que hemos analizado en párrafos anteriores y que hacen ra- ▶

zonerable esperar una reducción de remuneraciones motivo por el cual en adelante no nos referiremos a este sector.

Sin duda, parte importante del peso de la carga debe ser soportado por los deudores, por ser ellos quienes legalmente tienen las obligaciones vigentes. Sin embargo, es irreal pedirles, en términos generales, que cumplan sus compromisos en los plazos pactados y con las tasas de interés que rigen en el mercado. Si se desea resolver el problema a bajo costo económico y social se debe buscar una fórmula que les permita pagar en un plazo que necesariamente será largo. Mientras tanto es utópico pedirles que se dediquen a producir en forma eficiente como si no tuvieran encima una espada de Damocles que amenaza con decapitarlos. Por lo demás, debe tenerse presente que estos sectores productivos sufren las consecuencias de factores externos y de errores de conducción económica difíciles de prever aún por los más expertos.

El segundo sector involucrado es el de los intermediarios financieros, entre los que destacan los bancos, los fondos mutuos y las AFP. Empezando por las últimas, se debe destacar que los fondos no están en las Administradoras sino en los Fondos de Pensiones, de modo que en este caso es fácil distinguir entre los intereses de los propietarios de las AFP y de los titulares de los fondos. Quizás el mayor problema radica en que éstos están constituidos por un ahorro forzoso, que ha sido destinado a lo que la ley exige y permite, y que, en consecuencia, cuentan con respaldo estatal: Una parte importante de los fondos ha ido a los bancos, siguiendo el marco legal existente y en consecuencia se encuentra en la misma situación que los depósitos de éstos.

Los Fondos Mutuos constituyen un tipo especial de intermediario financiero que invierten en acciones, e instrumentos de deudas emitidas por empresas y en depósitos bancarios. En cuanto inver-

sionistas en acciones no constituyen mayor problema ya que en definitiva quienes han depositado en ellos, son, en forma indirecta, dueños de dichas acciones y en caso extremo se les puede pagar con ellas, o al venderlas en Bolsa pagarles lo que corresponda. En cuanto inversionistas en instrumentos financieros de empresas y depositantes en los bancos, en cambio, su situación es muy similar a la de otros grupos que trataremos a continuación.

El tercer intermediario es el sector bancario. En este sector es conveniente comenzar por recordar que entre el 90 y el 95% de los préstamos que tienen otorgados corresponden a fondos provistos por sus acreedores nacionales y extranjeros, de modo que lo que ocurra con este sector es inseparable de lo que ocurra con sus acreedores. No se puede desconocer, sin embargo, que en conformidad a las responsabilidades contractuales se debe responder primero a los acreedores y finalmente a los propietarios, de manera que éstos últimos deberían contribuir en forma decisiva a responder de las pérdidas que haya, antes de pedir a los acreedores que colaboren en la resolución del problema de fondo, que no es otro que la manifiesta insolvencia del sector deudor. Hay un aspecto del problema, sin embargo, que debe ser resuelto en forma paralela, pero con reglas propias, y éste es el de la relación entre los propietarios de los bancos y ciertos deudores, es decir, el de la cartera relacionada.

Salvados los puntos anteriores, que dicen relación con los propietarios de los bancos, es necesario hacer concurrir a un compromiso de solución a quienes hemos llamado los acreedores finales. Como hemos sostenido, entre el 90 y el 95% de los préstamos totales han sido financiados por este grupo. A ellos corresponde, en consecuencia, reconocer dos hechos decisivos: primero, que si quieren obtener el pago de los préstamos no pueden pretender cobrar ni en los plazos ni a las tasas que hoy en día existen, y se- ▶

gundo, que aún a plazos largos y tasas reales bajas es posible que no logren recuperar la totalidad de sus inversiones, efectuadas a altas tasas de interés y en consecuencia a alto riesgo.

Debe exceptuarse del comentario anterior a los depósitos bancarios de las A.F.P., ya que ellos han sido hechos en buena medida siguiendo disposiciones legales y en consecuencia se debería buscar un trato equitativo, quizás distinto al resto.

Puede cuestionarse aún qué papel le corresponde jugar al Gobierno en todo este embrollo. En un esquema de argumentación de pizarrón se podría sostener que ninguno ya que todos son problemas entre particulares. Sin embargo, la realidad nos enseña: a) que es difícil dejar quebrar un banco por su impacto sobre terceros (lo contrario no

implica ayuda a los accionistas), b) que las quiebras tienen un costo social y económico real, y c) que la institucionalidad legal, así como el aparato judicial existentes, hacen casi imposible resolver por esta vía un problema de la dimensión del actual y de las consecuencias que él proyecta.

Todo lo anterior sugiere fuertemente que el Gobierno es el único agente capaz de liderar a todos los grupos en conflicto por un camino de salida económico y social que permita recobrar la confianza y fijar los parámetros en los cuales se asentarán las bases de la futura reactivación. Soluciones técnicas hay muchas, pero ninguna puede ser exitosa si no hay previamente una decisión política para enfrentar en forma global y profunda los problemas que hemos mencionado, y que afectan seriamente el tejido social y económico del país.

R